

deuda interna, costo de la promoción industrial, subsidios a las exportaciones y otros conceptos menores. A esta cifra habría que agregar unos 35 mil millones de dólares que surgen de otro estudio del Banco Central, nunca publicado, que se habrían transferido a los grandes proveedores del Estado en el mismo período, en concepto de sobrepuestos.

Hacia el final del gobierno militar, en 1981/2, el entonces presidente del Banco Central y después ministro de economía del doctor Menem, el doctor Cavallo –cuyo segundo en dicho ministerio, el señor Llach, hoy dirige, como ministro de Educación, la reforma economicista del sistema educativo argentino– puso en práctica un seguro de cambio que permitió a los grandes deudores privados con el exterior transferir al Estado una parte mayoritaria de su deuda, que la estimación mínima cuantifica en 10 mil millones de dólares.

Podría suponerse, de acuerdo con las teorías neoliberales, que esta suprema concentración capitalista se habrá reducido en un espectacular aumento de la inversión. Por el contrario, la inversión neta fija, que en la década de los 70 había estado, en promedio, en el 15% del PBI, cayó hasta menos del 5% promedio en el período 81-89.

En la década de los 90 la situación se modificó pero no para mejorar. Los sectores dominantes lograron instalar socialmente la idea de que la hiperinflación era la consecuencia de mantener un Estado sobredimensionado y distribucionista responsable del estancamiento económico, de la ineficiencia y, en definitiva, de la desigualdad social. La privatización de las empresas del Estado (que se convirtió en una nueva fuente de subsidios para el capital concentrado, ya que en aplicación de la política de «capitalización de la deuda externa», promovida por el FMI, el Estado recibió como parte de pago de los activos nacionales que se privatizaban, a su valor nominal, bonos y títulos de la deuda pública desvalorizados en los mercados internacionales) y la vigencia universal de la regla del mercado y la competencia establecerían, según dichos sectores, los equilibrios mágicos que maximizarían el beneficio social e igualarían la distribución. El violento empobrecimiento y exclusión social, así como los mercados oligopólicos, desmienten con los hechos esas afirmaciones, y son manifestación e instrumento de la expoliación de recursos generados en el país y de su transferencia al exterior, a través de los servicios de la deuda externa y de la fuga de capitales.

Después de un corto período de dos años (1991/2) en que el crecimiento de la deuda se estabilizó y el saldo neto del movimiento de capitales se hizo positivo, proceso que estuvo vinculado a la privatización de las empresas nacionales a través del rescate de bonos de la deuda pública tomados como

parte de pago y del reingreso de capitales al país para efectuar las compras, a partir de 1993 tanto la deuda como la salida de capitales se dispararon. Desde esa fecha hasta 1997 la primera se incrementó en más de 61 mil millones de dólares y la salida de capitales superó los 42 mil millones. Esta última se alimentó no sólo ya del capital especulativo que cumplía en el país el proceso de valorización financiera y se iba, sino de otras dos fuentes de recursos: a) las superutilidades que aseguraron los regímenes de privatización gracias a tarifas abusivas y subsidios directos, y que las empresas privadas no reinvirtieron mayoritariamente sino que giraron al exterior; b) la vertiginosa valorización patrimonial, posibilitada tanto por la capacidad de las empresas privatizadas para generar beneficios extraordinarios, como se explica en a), cuanto por la subvaluación de los activos nacionales que adquirieron, lo que a partir de 1995 dio lugar a ventas de empresas cuyo producto líquido emigró del país.

La salida de capitales de 1993 a 1997 superó entre tres y dos veces la entrada de inversión extranjera directa, lo que subraya «el carácter depredatorio del patrón de acumulación en marcha» señala Basualdo, cuyos gestores pertenecen al partido opaco del poder real. La situación presente es tal que una hipotética moratoria del pago de la deuda externa favorecería al capital concentrado, cuya participación en la deuda total del país alcanza el 41%. No obstante, la deuda externa es importante tácticamente para dicho capital debido a que la gerencia del FMI y del Banco Mundial le ayuda a disciplinar las políticas sociales y económicas del país. Cuando los reclamos populares se desbordan, la presión de esos organismos convence a las autoridades de que es imposible responder a las protestas con reformas a la política económica que afecten a los grupos dominantes, de modo que aquéllas no tardan en convencerse de que la única solución con que cuentan es la policial.